

cienda pública por un contrato de vestuario: Visto lo que por la una y la otra parte se ha expuesto; lo que el Procurador General alegó en éstrados, y lo que en ellos le contestó el Lic. D. Gabriel Islas como patrono del demandado, así como todo lo demás que se tuvo presente y ver convino, y considerando: 1º, que el presente recurso de nulidad se interpuso al notificarse el auto fecha 21 de Julio de 1870, pronunciado por la primera Sala del Tribunal Superior del Distrito, que funcionaba como de Circuito. 2º, Que por lo mismo ha debido entenderse, como lo entendió aquel Tribunal, que el recurso se interponía y procedía contra el mismo auto fecha 21 de Julio; mas no contra la sentencia de 9 de Noviembre de 1869 pronunciada por el Juzgado primero de Distrito. 3º, Que sobre el auto fecha 21 de Julio, no se ha probado, ni esta Sala ha podido encontrar nulidad alguna. 4º, Que la nulidad alegada ante esta Sala, se refiere á los procedimientos del Juez de Distrito y á su sentencia de 9 de Noviembre de 1869. 5º, Que habiendo sido esta sentencia evidentemente apelable, su nulidad jamas ha podido reclamarse por el recurso especial y puramente supletorio, llamado de  *nulidad* , y sí únicamente por vía de agravio, conforme al artículo 88 de la ley de procedimientos de 1857, y en tal caso, no en esta Sala, sino ante la primera del Tribunal del Distrito que hace de Circuito. Por las razones y fundamentos expuestos, se declara: 1º, Que no hay nulidad alguna en el auto fecha 21 de Julio de 1870. 2º, Que es improcedente é inatendible la nulidad objetada en esta Sala en contra de la sentencia fecha 9 de Noviembre de 1869, pronunciada por el Juez primero de Distrito de esta capital. Hágase saber, y con testimonio de esta sentencia, remítanse los autos á la 1ª Sala del Tribunal Superior del Distrito en calidad de Tribunal de Circuito, archivándose á su vez el Toca. Así por unanimidad de votos lo proveyeron los ciudadanos magistrados de la 3ª Sala de la Corte Suprema de Justicia

de la Nacion, y firmaron.—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*Lic. Luis Malanco*, secretario.

Son copias. México, Abril trece de mil ochocientos setenta y uno.—*Lic. Luis Malanco*, secretario.

## AMPARO.

*Juicio promovido ante el Juzgado de Distrito de Tlaxcala, por el ciudadano Lic. Antonio A. Guerrero, en representacion de D. Moisés Perogordo, albacea y marido de la heredera de la testamentaria de D. Manuel Escontria, contra los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, por violacion del derecho de propiedad.*

### PEDIMENTO DEL CIUDADANO PROMOTOR FISCAL.

Ciudadano Juez de Distrito.

El ciudadano Lic. Antonio A. Guerrero, por D. Moisés Perogordo, en su carácter de albacea de la testamentaria de D. Manuel Escontria, á la cual se dice pertenecer la Hacienda del Naranjo, sita en el Estado y de la que es parte el punto conocido por Tantoyuquita, ha ocurrido pidiendo amparo contra el decreto número 74 del H. Congreso del Estado y su reglamento de 17 de Setiembre del año próximo pasado, fundando su pretension, en que tanto por aquel decreto, como por su reglamento, se viola la garantía que otorga á todo habitante de la República el artículo 27 de la Constitucion federal.

A tal peticion, proveyó V. por auto de 15 de Diciembre del mismo año, que la H. Legislatura y el ciudadano Gobernador del

Estado, produjeran el informe respectivo; disponiendo desde luego, con el carácter de providencia urgente ó interina, la suspension de los efectos del decreto y reglamento citados.

No obstante haberse repetido al Juzgado de 1ª instancia de la capital del Estado el exhorto correspondiente para que la II. Legislatura y el Ejecutivo informaran lo que respectivamente les tocaba, y de la excitativa dirigida á la Suprema Corte de Justicia del Estado, para que aquel Juzgado devolviera diligenciado el exhorto con informe ó sin él, se nota su falta en estos autos. Al pronto, y considerando el informe de la autoridad ejecutora del acto reclamado, ó el de aquella de que emanare como de trámite del juicio, pudiera dudarse si faltando dicho informe, se debe ir ó no adelante en la sustanciación del juicio; mas si se reflexiona que la autoridad ó autoridades que han debido informar, no son ni juntas ni separadas partes en el juicio, según el artículo 99 de la Ley orgánica de 20 de Enero de 1869, y atendiendo al espíritu del artículo 14 de la misma ley, entiendo el que suscribe, que la falta del informe no induce nulidad alguna en el presente juicio, y que por lo mismo no debe continuar suspensa su tramitación por mas tiempo, pues si alguna responsabilidad resultara por la falta de dicho informe, será de parte del Juzgado de 1ª instancia de Ciudad Victoria, en caso de que la omisión del informe no haya dependido del mismo Gobierno y H. Legislatura del Estado.

En cuanto á lo sustancial de la cuestion, justificada como está la existencia de los actos reclamados, por la exhibición que con el escrito de queja hizo el actor de los dos números del periódico "El Comercio de Tampico," en cuya parte oficial aparecen publicados el decreto y reglamento referidos, y resultando de los mismos términos en que estos están concebidos, especialmente el segundo, á virtud de la autorización que por el primero concedió la II. Legislatura del Estado al poder Ejecutivo del mis-

mo, que todos los 9,778, 050 metros cuadrados de tierra, mandados ocupar del punto de Tantoyuquita, se destinan á solares, potreros y labores para los pobladores de la Villa de Iturbide de Tamaulipas, esto es, á la propiedad particular y exclusiva comodidad y especulación de aquellos individuos, es evidente que no es por causa de utilidad pública que se expropia del terreno de dichos solares, potreros y labores, al actual propietario de Tantoyuquita, sino por la particular utilidad de los individuos que respectivamente los solicitaron y compraron; y como la ocupación de la propiedad de las personas, no puede hacerse, según el artículo 27 de la Constitución federal, sin su consentimiento (de la testamentaria) si no es por causa de utilidad pública, y previa indemnización, se deduce, que no concurriendo el consentimiento de la testamentaria propietaria, de lo que es prueba el presente juicio, no puede ocuparse por la Legislatura y Gobierno del Estado, el terreno mandado ocupar para la creación de la Villa de Iturbide de Tamaulipas, aun cuando se hiciera á dicha testamentaria la previa indemnización de él, sobre cuyo particular son muy atendibles, en concepto del Fiscal, las observaciones que en este respecto hace el actor en su escrito de queja.

Hay mas, en el evento de que el R. Ayuntamiento de Rayón, no tenga fondos para indemnizar al propietario del terreno mandado ocupar, se previene por el reglamento, que tal indemnización se haga por los pobladores de la nueva población: obligación que sin condicion alguna les niega la II. Legislatura en su precitado decreto; pero como estos, según el reglamento del mismo decreto, lo que tienen que pagar es el terreno de solar y lotes para labores y potreros que pidieron, resulta que no se ha determinado, en el caso propuesto, quién ha de indemnizar á la testamentaria de Escontría del terreno que se destina para calles, plazas y edificios públicos de la nueva población.

Por todas las consideraciones, y por las

demas que en apoyo de su pretension expone y desarrolla el actor en su escrito de queja, el fiscal concluye pidiendo:

1º Que sin embargo de echarse menos en estos autos el informe pedido á la II. Legislatura y Gobierno del Estado, se siga adelante en la sustanciacion del presente juicio.

2º Que previa comprobacion en el término probatorio, de ser el punto de Tantoyuquita parte integrante de la Hacienda del Naranjo, y de pertenecer esta á la testamentaria de D. Manuel Escontria, se conceda á su representante el amparo que ha solicitado.

Y 3º Que mientras tanto recae la resolucion definitiva del Juzgado, subsista la providencia interina que mandó suspender los efectos del decreto número 74 del Honorable Congreso del Estado, y del reglamento del mismo decreto.

Tampico, Noviembre treinta de mil ochocientos setenta.—(Firmado.)—*Lic. M. Ortiz.*

#### SENTENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO.

Tampico, Enero siete de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el juicio de amparo seguido ante este juzgado por el ciudadano Antonio A. Guerrero, en representacion de D. Moisés Perogordo, pidiéndolo contra el decreto de la Legislatura de Tamaulipas, de fecha 30 de Julio de 1869, en que se mandó erigir un pueblo con el nombre "Iturbide de Tamaulipas" el terreno llamado Tantoyuquita, perteneciente á la testamentaria de D. Manuel Escontria, de la que es albacea el señor Perogordo, y en aquel, el reglamento expedido por el Gobierno de este Estado, en que fija el modo de proceder á la division del terreno referido entre los nuevos pobladores, delineacion de las calles para la poblacion: la falta de informe que debieron rendir y no rindieron los poderes Ejecutivo y Legislativo de este Estado, no obs-

tante haberse expresado con exceso el que lo verificasen; lo pedido por el ciudadano Promotor Fiscal, en que apoya la solicitud del peticionario; las pruebas rendidas por éste y su alegato de bien probado; la citacion para sentencia, con todo lo demas que de autos consta, se tuvo presente y ver convino; considerando: que las razones expuestas por el ciudadano Lic. A. Guerrero son: 1ª, que el derecho de propiedad está garantizado por la Constitucion general, y ésta, al decir que la expropiacion por causa de utilidad pública, debe hacerse por la autoridad que designe la ley, cuya designacion no ha sido hecha todavía, y con ciertos requisitos que aun no se han fijado, dá sobradamente á entender que no pueden los congresos de los Estados expropiar á nadie, porque equivaldria á tenerse como autoridad competente para el caso. 2ª, Que la utilidad pública que se invoca respecto á los pobladores que se establezcan en Tantoyuquita, no es verdadera utilidad pública sino privada, de un número reducido de familias que emigran de Rayon, y por muchos que sean los particulares, siempre lo que goza cada uno es utilidad particular y no pública. 3ª, Que no puede dudarse que eso es precisamente lo que sucede respecto del terreno de cuya expropiacion se trata, pues el reglamento del Gobierno del Estado dice en uno de sus artículos, que cada poblador tendrá su solar y cierta porcion de tierra para labor, lo que indica que el uso de ese solar y de esa labor es especial del mismo poblador, y por lo mismo no puede decirse que hay uso comun ni utilidad pública. 4ª, Que la Constitucion general garantiza en todo caso la indemnizacion previa, y en el presente, no solo no la ha habido, sino que aun el mismo Gobierno del Estado parece prever que no la habrá, puesto que dice, que si el Ayuntamiento de Rayon no tiene fondos, distribuya los solares y haga que los pobladores los vayan recibiendo, los vayan pagando, lo que convence de todos modos que no existe esa indemnizacion previa, pues era necesario que

hubiese certeza de que fuesen ocupados todos los solares y labores, por el número completo de pobladores que admite el terreno, lo que no hay seguridad de que se verifique, sin embargo de que el dueño siempre quedará privado de él. Considerando que estas razones no han sido contradichas en el curso de este negocio, sino antes bien, amplificadas por el ciudadano Promotor Fiscal, y que ellas se han expuesto ya por otros juzgados de Distrito, al pronunciar algunas sentencias de amparo en casos semejantes al presente; como sucedió el 12 de Mayo de 1869 en Zacatecas, con la señora Doña María de Jesus Llaguno de Hoyo, á quien por decreto de aquella Legislatura se expropiaba de un terreno, autorizando al Gobierno del Estado para comprarlo, á fin de dividirlo entre los vecinos de la Municipalidad de S. Francisco de los Adamas, cuya sentencia, amparando á dicha señora Llaguno de Hoyo, fué confirmada en 2 de Junio del mismo año por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por tales fundamentos, los expuestos por la parte promovente, y lo pedido por el ciudadano Promotor Fiscal, se declara:

1º La justicia de la Union protege y ampara al ciudadano Antonio A. Guerrero, apoderado del señor D. Moisés Perogordo, como albacea testamentario de D. Manuel Escontria, contra el decreto del congreso de este Estado y reglamento de su Gobierno, en que se dispone la expropiacion del terreno llamado Tantoyuquita, para establecer una poblacion con los vecinos de la Villa de Rayon, por violarse con dicho decreto la garantía de la propiedad que protege el artículo 27 de la Constitución Federal.

2º Notifiquese á quienes corresponda, y remítanse en seguida estos autos á la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicándose esta sentencia por los periódicos, como lo manda la ley. Así definitivamente juzgando, lo decretó, mandó y firmó el ciudadano Lic. Ramon Rosales, Juez de

Distrito del Estado de Tamaulipas, actuando por receptoría á falta de escribano; de que testificamos.—(Firmados).—Lic. R. Rosales.—Asistencia, J. de la Cruz.—Asistencia, Manuel P. Samorés.

*Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Marzo entonce de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el recurso de amparo interpuesto por el Lic. Antonio A. Guerrero, en representación del albacea de D. Manuel Escontria, contra el decreto de la Legislatura del Estado de Tamaulipas, de 30 de Junio de 1869, en que se ordena la creacion de una Villa en el punto conocido por Tantoyuquita, de la Hacienda del Naranjo, perteneciente á la testamentaria de Escontria, y contra el reglamento del Gobierno del Estado, de 17 de Setiembre del mismo año, en que se fijó la extension del terreno que deba expropiarse, y los usos á que se destina. Visto el dictámen de la comision de la Legislatura del Estado, recibido por vía de informe ante esta Suprema Corte, despues de pronunciado el fallo del Juez de Distrito; los alegatos de los interesados, pedimento fiscal y demas constancias del expediente. Considerando en cuanto al decreto de la Legislatura: 1º Que los Estados son libres é independientes en lo que concierne á su régimen interior, y por lo mismo á ellos toca hacer la designacion de distritos, municipalidades, congregaciones, etc., en su respectivo territorio, de la manera mas conveniente para su organizacion. 2º, Que es un principio reconocido de utilidad pública, la mejora y progreso de las poblaciones establecidas, y la creacion de nuevas. 3º Que segun el artículo 4º del decreto de la Legislatura, la creacion ordenada de la Villa de Iturbide de Tamaulipas, solo debe verificarse, previo el requisito de ser indemnizado el propietario del valor del terreno, y por consiguiente, ha llenado los requisi-

tos constitucionales para la expropiacion. Considerando en cuanto al reglamento del Gobierno del Estado: 1º Que en él se fija la extension del terreno que deba ocuparse, en medio sitio de ganado mayor; destinándose de esta superficie un millon de metros cuadrados para la formacion de la Villa, calles, manzanas, plazas, edificios públicos y demas necesario para asiento del nuevo pueblo, y el resto para fraccionarlo en lotes, que deberán enajenarse á los particulares que lo soliciten. 2º Que al consignarse el producto de la enajenacion de terrenos para fondos de la indemnizacion, si el Ayuntamiento no tuviera los bastantes, no se altera la disposicion de la Legislatura, para que la indemnizacion sea previa, ni puede entenderse derogada la terminante disposicion del expresado decreto, para que sin ser indemnizado previamente el propietario, se tenga por no expedido el mismo decreto. 3º Que seria ilusoria la creacion de un pueblo, si no se le proveyesse de suelo propio para su asiento y fundo legal, de consiguiente hay pública utilidad en la expropiacion por este motivo. 4º Que no estando expedida la ley orgánica del artículo 27 de la Constitucion, seria aventurado, en un fallo judicial, sancionar como principio de utilidad pública, para fundar la expropiacion, el fraccionamiento de una propiedad particular. Por tales fundamentos, se reforma la sentencia pronunciada por el Juzgado de Distrito de Tamaulipas en 7 de Enero del corriente año, en que concede el amparo contra el decreto de la Legislatura de 30 de Junio de 1869, y reglamento del Gobierno del Estado, y se declara: 1º Que la Justicia de la Union no ampara ni protege al representante de la testamentaria de Escontria, contra el decreto de la Legislatura de Tamaulipas, que ordena la creacion de una Villa en el punto llamado Tantoyuquita. 2º La Justicia de la Union no ampara ni protege al peticionario, contra el reglamento de 17 de Setiembre de 1869, del Gobierno del Estado, en la parte que ordena la expropiacion de un millon de me-

tros cuadrados, para asiento y fundo legal del mismo pueblo. 3º Que la Justicia de la Union ampara y protege al quejoso contra el reglamento referido, en la parte que ordena la expropiacion de ocho millones, seiscientos setenta y ocho mil metros cuadrados, para su fraccionamiento y enajenacion á los particulares que lo soliciten.

Devuélvase sus actuaciones al Juez de Distrito de Tamaulipas, con copia certificada de este fallo para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Tocon.

Así por unanimidad de votos respecto del primer punto, y por mayoría respecto del segundo y tercero, lo decretaron los ciudadanos Presidente y ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—(Firmados.)—*S. Tierdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*José Arteaga.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Aza.*—*S. Guzman.*—*L. Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Son copias. México, Abril cuatro de mil ochocientos setenta y uno.—*Agustín Peralta*, oficial mayor.

## PAPEL SELLADO.

*Juicio promovido, ante el Juzgado de Distrito de Zacatecas, sobre la denuncia hecha por el Administrador de Papel Sellado, relativa á la infraccion cometida por D. Angel Bárcena de la fraccion 9ª del artículo 19 de la ley de 14 de Febrero de 1856.*

PEDIMENTO DEL CIUDADANO PROMOTOR  
FISCAL.

Ciudadano Juez de Distrito.

La averiguacion que antecede, se ha instruido contra el español D. Angel Bárcena